

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 25 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el C. Juan Amador, contra los procedimientos del C. Gefo de Zongolica, que le ha mandado reducir á prision y le juzga como plagiario y saltador, habiéndose acogido como rico político á la ley de amnistía, alegando que con dichas providencias se violan en su persona las garantías que otorgan los artículos 17 parte del 13, 16, 20 y 21 de la Constitución de 1857. Vistas las constancias de autos y considerando que el C. Juan Amador fué considerado como rico político al acogerse á la amnistía, cuya declaracion se hizo por el Gobierno de la Union como consta de los telegramas del Ministerio de Guerra que corten en el expediente, que en su calidad de amnistiado se presentó á las autoridades del lugar de su residencia, donde ha vivido pacíficamente, hasta que se libró el exhorto que ha motivado su prision; este acto importa una violacion expresa de las garantías aludidas por el quejoso en su escrito de queja. Con tales fundamentos se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Veracruz, cuya parte resolutive es como sigue. “La Justicia Federal ampara y protege al C. Juan Amador, contra las providencias dictadas por la Jefatura política de Zongolica para reducirlo á la prision en que se encuentra y comprenderlo en una causa que debia seguirse contra otros por los delitos de plagio y salteamiento.”

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Juan A. Muleos*, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 22 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por D. Juan Antonio Loaeza, por sí y en representación de la Sra. su esposa D^a Emilia Vargas, contra el C. Lic. Jesus Rios y Valles, nombrado recaudador del subsidio extraordinario decretado por la Legislatura del Estado en 28 de Noviembre del año próximo pasado, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Jefatura Superior de Hacienda de Durango. Para poder formar una idea de las pruebas aducidas por el C. Juan Antonio Loaeza, en el juicio de amparo promovido contra la providencia de embargo que intentó hacer sobre los bienes de este y los de su esposa, el recaudador del subsidio extraordinario impuesto en el Estado en 28 de Noviembre del año próximo pasado de 1872, es necesario hacer una narracion de ellas, así como de las que se oponen en contrario para desvirtuarlas.

El que lleva la voz fiscal procurará hacerlo del modo mas conciso que le sea posible, dándole á cada una de ellas el valor y fuerza que á su juicio tengan y sacar de la comparacion de ellas el juicio que cree deberá formarse de este desagradoable asunto.

1.^a La ley del Estado de 25 de Enero

de 1862, dice en su artículo único: "Los funcionarios de la Federacion que gozan del fuero que conceden los artículos 103, 104 y 105 de la Constitucion general, no podrán desempeñar durante el tiempo de tal prerogativa empleo alguno del Estado que importe el ejercicio de alguno de los tres poderes en que está dividida la Soberanía del mismo."

2º La Constitucion del Estado reformada en 1863, en el art. 54, dice: "Para ser Gobernador del Estado se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, de treinta años de edad, originario de la República, no ser Ministro de ningun culto religioso ni empleado de la Federacion."

3º Se citan en el alegato multitud de hechos que prueban que los empleados del Estado han quedado suspensos en sus destinos luego que por una eleccion popular han sido electos para desempeñar alguno de la Federacion, comprobándolo con documentos emanados de las Legislaturas del Estado. Por la parte del Gobierno se opone, que aunque es cierta la existencia de la ley que se cita y no se niega que sea precepto constitucional la prohibicion para poder desempeñar el Gobierno el que sea empleado de la Federacion, espone.

1º Que ha renunciado el cargo de Diputado.

2º Que su eleccion para este empleo fué nula por falta de quorum en el número de electores que lo nombraron.

3º Que siendo tanto el empleo de Gobernador como el de Diputado, de eleccion popular, está á su arbitrio elegir el que mejor le parezca con arreglo al art. 118 de la Constitucion general.

4º Y último: que con posterioridad al nombramiento de Diputado el C. D^o. Hernandez y Marin recibió de la Legislatura para sancionar y ejecutar el decreto que establece el subsidio extraordinario que ha dado motivo á este amparo, y algunas otras disposiciones de es-

ta, lo que prueba que lo ha reconocido como Gobernador.

Se deberá contestar á la primera, que aunque haya renunciado el cargo de Diputado, no se puede considerar que haya perdido el fuero constitucional interin no sea admitida la renuncia por el Soberano Congreso de la Union, de lo cual no hay constancia alguna.

A la segunda, que la calificacion de la validez ó nulidad de las elecciones de Diputados está reservada al Congreso de la Union segun el art. 60 de la Constitucion general.

A la tercera, que la facultad de elegir entre dos empleados de eleccion popular, se entiende cuando estos son de la Federacion segun el art. 118 ya citado, pero no cuando uno de ellos es del Estado y otro de la Federacion, porque entonces se infringiria el art. 40 de la Constitucion de la República.

A la cuarta y última, que si ha continuado en el Gobierno cumpliendo con las disposiciones de la Legislatura y poniendo en ejecucion las leyes emanadas de esta, ha sido solo por la benignidad de dicha corporacion, que ha preferido sacrificar en obsequio de la buena armonia, el cumplimiento de las leyes y la observancia de la Constitucion del Estado.

En vista de los datos que anteceden, el que lleva la voz fiscal esquivó la cuestion que se ha suscitado sobre legitimidad ó ilegitimidad del primer Magistrado y solo lo considera como suspenso en sus funciones hasta que deje de disfrutar el fuero constitucional. El C. juez de Distrito, juzgando las razones mutuamente alegadas por las partes, fallará lo que estime de justicia.

Durango, Marzo 4 de 1873.—*Manuel Balda.*

Es copia que certifico. Durango, Marzo 8 de 1873.—*Manuel Balda.*

SENTENCIA del C. Juez de Distrito.

Durango, Marzo 8 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Dr. Juan Antonio Loaeza, por sí y á nombre de su esposa, contra los procedimientos del C. Lic. Jesus Rios y Valles, nombrado recaudador del subsidio extraordinario decretado por la Legislatura del Estado en 28 de Noviembre del año próximo pasado. Visto el informe respectivo, las pruebas presentadas por el quejoso, el pedimento Fiscal y cuanto mas ver convino.

Considerando: que en el actual Orden de cosas la Constitución general de la República promulgada el 5 de Febrero de 1857 es la suprema ley de la nacion mexicana (art. 126 de la Constitución).

Que su respetabilidad y su fuerza obligatoria la viene de la sancion y promulgacion que el pueblo mexicano la ha dado (artículo transitorio del mismo Código).

Que por esta causa, y por la de que viene á ser el arca sagrada donde ese mismo pueblo ha depositado sus libertades, á fin de que ni aun el mismo legislador pueda tocarlas, todas las autoridades del pais tienen la estricta obligacion de guardarla y hacerla guardar y respetar (art. 1º de id.)

Que con la observancia de esa Constitución y demas leyes orgánicas que de ella emanan, quedan completamente asegurados los mas preciosos derechos del hombre, que son el objeto y la base de todas las instituciones sociales (el mismo artículo).

Que con el fin de que esa observancia sea efectiva, y perfecto el goce de esos derechos, la nacion ha puesto en cada Estado sus representantes que son los guardianes de las libertades públicas y privadas, y los custodios del depósito, que de aquellos ha hecho el pueblo en su Carta fundamental

Que tan alto carácter y tan elevada

mision está confiada á los tribunales de la Federacion, cuyas atribuciones están detalladas mas particularmente en los artículos 97 y 101 del referido Código.

Que en el art. 97 espresamente se declara que á los tribunales de la Federacion toca conocer, entre otras cosas, de todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicacion de las leyes federales; y en el 101 se determina, que les corresponde resolver toda controversia que se origine por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.

Que las anteriores consideraciones indican claramente la facultad que tiene este Juzgado de Distrito para resolver lo que mas convenga en este importante negocio.

Que con el ejercicio de esta facultad no se ataca la soberanía de los Estados como erróneamente se ha creído, supuesto que estos han convenido en que esa soberanía quede establecida de una manera no absoluta, sino tan solo relativa, y siempre bajo los principios de una ley fundamental, que en el caso lo es la Constitución de 1857 (artículos 40 y 41 del mismo Código).

Que por otra parte, en virtud de las estipulaciones del Pacto Federal, á las que en ningun caso podrá contravenirse, los Estados han cedido parte de su soberanía, depositándola en un centro común que se llama Supremos Poderes de la Federacion, cuyo ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, depositándose el ejercicio de este último en una Corte Suprema de Justicia, á la vez que en los tribunales de Distrito y Circuito (artículos 50 y 90 de id.)

Considerando: que antes de declarar y determinar las bases de la resolucion que deba recaer en este negocio, es preciso hacer un resumen de las razones alegadas por el C. Dr. Juan Antonio Loaeza para impetrar el presente recurso.

Que su razonamiento está concebido y fundado en las siguientes consideraciones: "Se resiste á pagar el subsidio, porque el C. Lic. Jesus Rios y Valles, que es el recaudador, no tiene facultades legítimas para cobrarlo: Que carece de dichas facultades, porque ha sido nombrado por el C. Gobernador actual, en tiempo que ha dejado de serlo legalmente: Que el C. Gobernador Lic. Juan Hernandez y Marin ha dejado de tener ese carácter público, á causa de haber sido electo Diputado al Congreso de la Union, cuyo encargo ó empleo es incompatible con el primero: Que en consecuencia, desde la noticia que se ha dado de su eleccion, son nulos todos sus actos como gefe del Estado, incluyéndose en ellos el nombramiento de recaudador del subsidio, por haber tenido éste lugar despues de aquella eleccion."

Toca pues, al Juzgado, examinar si son exactos los hechos, y si es cierto é indubitable el derecho que de ellos pretende deducirse.

Que el C. Gobernador actual Lic. Juan Hernandez y Marin ha sido electo Diputado al Congreso de la Union, es un hecho que se colige de la acta relativa publicada en el número 10 de la "Restauracion Constitucional," y que aparece á las fojas 14 del cuaderno de pruebas, habiendo tenido lugar esa eleccion en el 4º Distrito electoral el 29 de Octubre del año próximo pasado.

Que desde esa fecha, el C. Lic. Juan Hernandez y Marin es Diputado al Congreso de la Union, y goza del fuero constitucional á que se refieren los artículos 103, 104 y 105 de la Carta fundamental de la República, es otro hecho que se deduce de los simples principios de derecho, y del espíritu del artículo 53 del referido Código.

Que una vez siendo Diputado al Congreso de la Union, el C. Hernandez y Marin no puede ya ejercer legítimamente el cargo de Gobernador del Estado,

Tomo III.—Parte II.

se colige de lo prescrito, tanto en la ley de 25 de Enero de 1862 que no está derogada, como en el art. 54 de la Constitucion del Estado reformada en Mayo de 1863.

Que en consecuencia, desde la publicacion de esa eleccion, todos los actos del C. Hernandez y Marin como Gobernador del Estado, son nulos y de ningun valor, quedando comprendido entre ellos, el nombramiento de recaudador del subsidio, hecho en la persona del C. Lic. Rios y Valles, por haberse verificado con posterioridad á aquella publicacion, como aparece de la constancia que obra á fojas 12 del mismo cuaderno de pruebas.

Que por lo espuesto, y viniendo el nombramiento del C. Rios y Valles de una autoridad de mero hecho, su origen es vicioso, quedando constituido bajo las mismas condiciones que su comitente, y no tiene por lo mismo facultades para cobrar el subsidio, ni mucho menos para ejercer las económicas coactivas.

Que quedando constituido el referido recaudador en la posicion de autoridad de mero hecho, es nula su competencia, y su incompetencia omnínoda y absoluta.

Que en este predicamento debe ser considerado como cualquiera otra autoridad y comprendido en el art. 16 de la Constitucion general, puesto que éste no hace distincion ni escepcion alguna.

Que admitir tal distincion y escepcion en favor de las autoridades de hecho, sería hacer á estas de mejor condicion que á las autoridades legítimas.

Que por otra parte, las autoridades de hecho, reputándose ó pretendiendo ser legítimas, y contando, como cuentan, para llevar á cabo sus determinaciones con todos los elementos de la autoridad legítima, hay que admitir en contra de ellas todos los recursos legales que en su caso procederian contra esta.

Considerando: que antes de dar reso-

lucion definitiva en este asunto es conveniente hacerse cargo de las razones en contra que se han alegado, tanto por la Legislatura del Estado, como por el organo oficial del ejecutivo del mismo.

Que estas son en compendio las siguientes: 1.^a Que el C. Lic. Juan Hernandez y Marin ha renunciado el cargo de Diputado. 2.^a Que su eleccion para ese empleo es nula por falta en el número de electores el quorum que la ley exige: 3.^a Que siendo de eleccion popular, tanto el empleo de Diputado como el de Gobernador, ha estado en arbitrio del referido ciudadano escoger el que mejor le parezca: 4.^a Que con posterioridad al nombramiento de Diputado, el C. Lic. Hernandez y Marin recibió de la Legislatura para sancionar y ejecutar, el decreto que establece el subsidio, y que ha dado motivo á este amparo, así como tambien ha recibido algunas otras disposiciones, lo que prueba que la Legislatura misma lo ha reconocido como Gobernador del Estado.

Se deberá contestar á lo primero, que aunque haya renunciado el cargo de Diputado, no hay constancia alguna que lo acredite, y subsiste entretanto el alto fuero constitucional.

Respecto de lo segundo, hay que advertir, que segun el art. 60 de la Constitucion general, toca al Congreso de la Union calificar sobre la validez ó nulidad de las elecciones de sus miembros, y mientras esto no suceda, subsiste el inconveniente legal que se ha objetado al C. Hernandez y Marin para ser Gobernador del Estado.

En cuanto á lo tercero, deberá tenerse presente, que la facultad de elegir entre dos empleos de eleccion popular se entiende y debe entenderse, cuando estos son ambos de la Federacion ó ambos del Estado, pero nunca cuando uno de ellos es del Estado y otro de la Federacion, porque se infringiria el art. 40 de la

Constitucion, y las leyes del Estado arriba citadas.

Por lo que mira á la consideracion de que el Congreso ha tolerado al actual C. Gobernador, apesar del impedimento legal que tiene, debe responderse, que esto es un hecho en que se ha sacrificado el cumplimiento de las leyes y la obediencia de la Constitucion del Estado, á la inmensa conveniencia pública.

En vista de todo lo espuesto, el C. juez de Distrito del Estado, dijo: que prescindiendo por á hora de la cuestion de ilegitimidad del C. Gobernador actual, la cual se ha tocado tan solo por la conexcion que tiene con este juicio, y restringiéndose al caso particular del presente recurso, segun las prescripciones de la ley de 20 de Enero de 1869, declaró: 1.^a Que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Lic. Juan Antonio Loeza y á su esposa D^{ña} Emilia Vargas, contra los procedimientos del C. Lic. Jesus Rios y Valles, titulado recaudador del subsidio extraordinario decretado por la Legislatura del Estado. 2.^a Que los miembros del Congreso que dieron su voto para que no se ministraran á este Juzgado las constancias que se le pidieron por auto de fecha 12 del corriente, han incurrido en responsabilidad individual, desobediendo el precepto de una ley constitucional. 3.^a Publíquese esta sentencia por los periódicos, remítanse estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision, y sáquense las copias correspondientes para la relacion del "Semnario Judicial." Y por este auto así lo proveyó y firmó el espresado C. juez, por ante mí de que certifico.—*Gerónimo Sida.*—*Juan B. Arrellano*, secretario.

Es copia que certifico. Durango, Marzo 8 de 1873.—*Juan B. Arrellano*, secretario.

SECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 28 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por D. Juan Antonio Loaeza, por sí y en representación de su esposa la Sra. D^a Emilia Vargas, contra el recaudador del subsidio extraordinario establecido en el Estado por decreto de 28 de Noviembre de 1872, atendiendo á que el quejoso alega para apoyar su solicitud que el recaudador del subsidio extraordinario no es autoridad competente, porque su nombramiento proviene del Gobernador del Estado, quien no ejerce autoridad legítima porque ha sido electo Diputado al Congreso general y según el decreto de 25 de Enero de 1862, los funcionarios de la Federación que gozan del fuero que conceden los artículos 103, 104 y 105 de la Constitución Federal, no podrán desempeñar durante el tiempo de tal prerogativa empleo alguno del Estado que implique el ejercicio de alguno de los tres poderes en que está dividida la soberanía del mismo y según el art. 54 de la Constitución del propio Estado, para ser Gobernador de él, se requiere entre otras circunstancias no ser empleado de la Federación; añadiendo también á que por haberse negado la Legislatura del Estado á remitir al juez de Distrito los documentos que éste pidió para que obrasen como prueba, declaró en su fallo que los miembros del Congreso que dieron su voto para que no se ministrasen al Juzgado las constancias que se le pidieron por auto de fecha 12 del corriente, han incurrido en responsabilidad individual, desobedeciendo el precepto de una ley constitucional; y considerando respecto al punto relativo á la legitimidad de las acciones del recaudador del subsidio extraordinario y de las del Gobernador del Estado, que aquel está nombrado por el ejercicio de sus funciones de Gobernador, cuyo cargo no puede decirse

que lo desempeña ilegalmente, porque ya electo no ha resuelto optar por el cargo de Diputado al Congreso de la Union, en vez del de Gobernador del Estado, como está en sus facultades naturales: Considerando: respecto de la declaración del juez de Distrito de Durango en la parte relativa á que han incurrido en responsabilidad los miembros de la Legislatura de su Estado que votaron que no se remitiesen al Juzgado las constancias que pidió, que tal declaración no está en las facultades de los jueces federales, porque los miembros de las Legislaturas son irresponsables, y que haberlo hecho demuestra de parte del juez ignorancia notable de derecho constitucional y de sus deberes, por lo espuesto y de conformidad con lo que ordena el art. 101 de la Constitución Federal, se declara:

Primero: que se revoca la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 8 del presente, por el juez de Distrito de Durango, en la parte que declara que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Dr. Juan Antonio Loaeza y á su esposa D^a Emilia Vargas, contra los procedimientos del C. Lic. Jesus Rios y Valles, titulado recaudador del subsidio extraordinario decretado por la Legislatura del Estado.

Segundo: que se revoca la propia sentencia en la parte que declara que los miembros del Congreso que dieron su voto para que no se ministraran al Juzgado las constancias que se le pidieron por auto de fecha 12 del corriente, han incurrido en responsabilidad individual desobedeciendo el precepto de una ley constitucional.

Tercero: lo acordado.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de

votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Cueva.*—*José Arceaga.*—*P. Ordaz.*—*Francisco Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*José Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 18 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por María Clemente Portada, contra el Regidor decano del municipio de la Resurreccion, que dió posesion de un terreno llamado Calali, á los herederos de Laureano Portada.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El juez de Distrito:

En el ocaso de folias 2 se queja María Clemente de haber sido despojada de un terreno llamado Calali, que poseía en el pueblo de la Resurreccion, de órden del Regidor decano C. Mariano Rodríguez, y dice: que con ese acto se han violado en su persona las garantías que le otorga la Constitución General, en sus artículos 16 y 27.

Admitido que le fué el recurso, se pidió el informe á la autoridad responsable, quien viene manifestando en él: que ante su Juzgado, que es el 1º mayor de paz de aquel pueblo, se siguió un juicio por todos sus trámites hasta haberse pronunciado sentencia definitiva que le fué desfavorable á la promovente, por haberse justificado competentemente, tanto por los documentos que se presentaron de parte del legítimo dueño, como por confesion de María Clemente, que ese terreno, conocido con el nombre de Calali, no era de su

propiedad sino de la de los padres de los que se lo disputaron y actualmente lo poseen. Manifiesta además, que á consecuencia del fallo que pronunció, se interpuso el recurso fuera de grado por la interesada ante el Tribunal Superior del Estado, que le fué desechado por improcedente.

Esta simple relacion de los hechos justificada de la manera que quiere la ley, basta á convencer de que no hay infraccion de las garantías de los artículos constitucionales invocados, y que aunque la hubiera, no cabria el recurso de amparo por ser subsidiario y por ser de los que habla la ley de 20 de Enero de 1869, en su art. 8º.

En esa virtud, y con fundamento de dicho artículo, el Promotor pide á vd. se sirva así declararlo, condenando á la interesada á la multa que previene el art. 16 de la ley citada.

Zaragoza, Agosto 1º de 1872.—*Eugenio Sanchez.*

SENTENCIA del ciudadano juez de Distrito.

Puebla, Setiembre 23 de 1872.—Visto este juicio de amparo promovido por María Clemente, contra el Regidor decano del municipio del pueblo de la Resurreccion, por la ocupacion de un terreno llamado Calali; el escrito de queja; el informe producido por la autoridad responsable; el parecer fiscal; las pruebas rendidas; los alegatos y cuanto ha sido de verse y ver convino. Considerando que ha servido de fundamento á la interesada para solicitar el amparo de la Justicia Federal, lo dispuesto por los artículos 16 y 27 de la Constitución, cuyas garantías que otorgan esos artículos, hayan violádose en su perjuicio por el C. Alcalde del pueblo de la Resurreccion, con motivo de haberle quitado la posesion del terreno denomina-